

C-13652-2017??

?

Foja: 1

FOJA: 70 .- .-

NOMENCLATURA?: 1. [40]Sentencia??

JUZGADO ??: 1° Juzgado Civil de San Miguel

CAUSA ROL?: C-13652-2017

CARATULADO?: PONCE/PONCE

San Miguel, once de Septiembre de dos mil veinte

??????

VISTOS

□Comparece don Cristian Pincheira Castro, abogado con domicilio en calle Padre Mariano 391, oficina 602, Providencia, en representación convencional de don **Hernán Ponce Prieto**, médico veterinario, domiciliado en calle Séptima Avenida N°1370, departamento 38, San Miguel, quien deduce demanda de resolución de contrato de compraventa de derechos sociales, con indemnización de perjuicios, en contra de don **Juan Ponce Prieto**, ingeniero civil, domiciliado en calle Prima Transversal N°5875, departamento 1605, comuna de San Miguel.

Señala que por escritura pública de fecha 11 de marzo de 2013, su representado suscribió con el demandado, y compareciendo además don Pablo Ponce Vera, una modificación de la Sociedad Agropecuaria Silvicola Agroanimal Limitada, constituida con fecha 03 de agosto de 2007, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 35328, número 25256 del Registro de Comercio de Santiago del año 2007. La modificación social fue inscrita a fojas 29709, número 19705 del año 2013, y publicada en el diario oficial el día 13 de abril de 2013.

Indica que en la cláusula segunda de la modificación social, don Hernán Ponce Prieto vendió, cedió y transfirió a don Juan Carlos Ponce Prieto, el 98% de la totalidad de los derechos que al primero le correspondían en la sociedad referida presentemente. El precio de venta de los derechos sociales ascendió a la suma de 34 millones de pesos, de los cuales \$20.000.000 fueron pagados al contado y en dinero en efectivo, y la diferencia de \$14.650.000 serían pagados el día 30 de abril de 2013.

Explica que don Juan Carlos Ponce Prieto no dio cumplimiento íntegro a su obligación de pago del precio de la compraventa, por cuanto no pagó a su representado la suma de \$14.650.000.

Manifiesta que el demandado es dueño de los derechos sociales que adquirió a su representado, por lo que ha aprovechado su calidad de socio sin haber cumplido íntegramente el contrato de compraventa de dichos derechos. Así, y pese a que su representado cumplió cabalmente con la obligación de hacer tradición de los derechos sociales, el demandado no pagó el saldo del precio, hecho que da cuenta del incumplimiento de contrato que lo habilita como parte cumplidora, a exigir que se declare judicialmente la resolución del contrato conjuntamente con la indemnización de perjuicios, comprendiendo el daño emergente, lucro cesante y devolución de los frutos, como asimismo, los perjuicios de daño moral a don Hernán Ponce Prieto.

Funda lo anterior en que se constituye un incumplimiento de las obligaciones del comprador en el contrato de compraventa, en particular el pago del precio. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 1871 y 1872 del Código Civil que cita.



Foja: 1

Arguye que el deudor se encuentra en mora, es decir, el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación, dado que se estipuló un plazo para pagar el saldo de precio, hasta el 30 de abril de 2013, por lo que de acuerdo con el artículo 1551 N°1 del Código Civil se constituyó en mora al cumplimiento del plazo estipulado. Y de acuerdo con el artículo 1557 del Código Civil debe las indemnizaciones de perjuicios desde ese momento.

Manifiesta que su parte ha optado por demandar la resolución del contrato más la indemnización de perjuicios de acuerdo con las reglas generales y especiales del contrato de compraventa. Así, cita los artículos 1489, 1873 y 1559 del Código Civil que cita.

Adicionalmente, solicita la restitución de los frutos en la proporción que corresponde a la parte del precio que no fue pagado, considerando que no fue pagada la suma de \$14.650.000 de un total de \$34.000.000, ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1875 del Código Civil. En ese sentido, solicita se declare que el comprador es poseedor de mala fe de la participación en la sociedad indicada.

En cuanto a los perjuicios, señala que hace ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 173 del Código Civil, reservándose el derecho de discutir la especie y el monto de los frutos y perjuicios en la ejecución del fallo.

Finaliza, previa citas legales, solicitando que en definitiva se declare la resolución del contrato de compraventa de fecha 11 de marzo de 2013; que se condene al demandado al pago de una indemnización por los perjuicios que el incumplimiento le provocó; que se le condene a la devolución de los frutos; que para efectos del abono de los deterioros al vendedor, el demandado sea considerado y declarado poseedor de mala fe de los derechos sociales; que se acceda a la reserva del derecho a discutir la especie y monto de los perjuicios y frutos en la etapa de ejecución del fallo; y que se condene en costas a la parte demandada.

Con fecha 25 de enero de 2018 se notificó la demanda a la parte demandada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 27 de abril de 2018 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada, y se citó a la audiencia de conciliación.

Con fecha 13 de agosto de 2020 se celebró la audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldía de la parte demandada.

Con fecha 21 de agosto de 2020 se recibió la causa a prueba fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Con fecha 25 de junio de 2020 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que don Cristian Pincheira Castro, en representación convencional de don Hernán Ponce Prieto, deduce demanda de resolución de contrato de compraventa, con indemnización de perjuicios, en contra de don Juan Ponce Prieto, y solicita que la resolución del contrato de compraventa de fecha 11 de marzo de 2013; que se condene al demandado al pago de una indemnización por los perjuicios que el incumplimiento le provocó; que se le condene a la devolución de los frutos; que para efectos del abono de los deterioros al vendedor, el demandado sea considerado y declarado poseedor de mala fe de los derechos sociales; que se acceda a la reserva del derecho a discutir la especie y monto de los perjuicios y frutos en la etapa de ejecución del fallo; con costas.

Funda su demanda en los motivos de hecho y derecho expuestos en la parte expositiva de la sentencia.

SEGUNDO: Que se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada.



Foja: 1

TERCERO: Que la acción resolutoria de autos encuentra su fundamento normativo en los artículos 1489, 1871 y 1873 del Código Civil; el primero dispone que “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”; y el segundo, establece que “la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido”; y el último, señala respecto del contrato de compraventa en particular que “Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”.

Por su parte, el artículos 1551 del Código en comento, señala que “El deudor está en mora, 1º Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora; 2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 3º En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”.

Luego, en cuanto a la indemnización de los perjuicios solicitados, el artículo 1559 del mismo cuerpo legal, establece que “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1ª. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.- 2ª. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo.- 3ª. Los intereses atrasados no producen interés.- 4ª. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

Finalmente, los frutos reclamados encuentran su fundamento en el artículo 1875 del Código Civil, el cual dispone que “La resolución de la venta por no haberse pagado el precio, dará derecho al vendedor para retener las arras, o exigir las dobladas, y además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.- El comprador a su vez tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio.- Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros al vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado”

CUARTO: Que en virtud de lo anterior, cabe hacer presente que nuestra Excm. Corte Suprema ha señalado que son presupuestos que deben concurrir para la procedencia de la acción resolutoria incoada: a) que se trate de un contrato bilateral; b) que las obligaciones estén pendientes en la época de su resolución; c) que no se cumpla por una de las partes lo pactado; y d) que el contratante que pide la resolución debe haber cumplido por su parte o debe estar llano a cumplir en tiempo y forma.

Además, razona dicha magistratura respecto del artículo 1489 del Código Civil, que dicha norma “se encarga de disponer la resolución de todo contrato bilateral en que una de las partes “cumplidora o llana a cumplir” se enfrenta a un co-contratante que no hace lo propio. Es una norma legal destinada a proteger el cumplimiento de aquella parte que cumple para exigir de la otra lo mismo, resolviéndose el contrato si ese fin principal no pudiese conseguirse” (Sentencia de Casación dictada por la Excm. Corte Suprema con fecha 27 de septiembre de 2016, Rol C-17061-2016).

QUINTO: Que establecido lo anterior, y de conformidad a la regla del onus probandi contenida en el artículo 1698 del Código Civil, “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, lo que se traduce en la especie, por una parte en la carga probatoria del demandante de acreditar la existencia del contrato de compraventa invocado y sus obligaciones, además de los perjuicios sufridos; y por la otra, en la carga de la parte demandada el probar los



Foja: 1

hechos extintivos, impeditivos o modificativos capaces de justificar el rechazo de la demanda, tales como sería el pago del precio o la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.

SEXTO: Que para acreditar su aserto, el demandante rindió la prueba documental, legalmente agregada y sin ser objetada por la demandada, consistente en:

- 1.- Copia de escritura pública de modificación social de fecha 11 de marzo de 2013;
- 2.- Copia de extracto de la escritura individualiza en el número anterior otorgada ante la notaría pública de Linares de doña Marta Alvarado Agurto, inscrito a fojas 667, número 147 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador y Archivero Judicial de Linares;
- 3.- Publicación de escritura de modificación social en el diario oficial de fecha 13 de abril de 2013;
- 4.- Copia escritura pública de constitución de sociedad con fecha 03 de agosto de 2007;
- 5.- Copia de inscripción de extracto de constitución de sociedad a fojas 35328, número 25256, correspondiente al Registro de Comercio del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago;
- 6.- Copia de inscripción de modificación social a fojas 29709, número 19785 del Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago;
- 7.- Copia de cheque emitido por Juan Carlos Ponce Prieto con fecha 30 de abril de 2013, por \$15.000.000, conjuntamente con acta de protesto emitida por Banco BCI, por falta de fondos con fecha 24 de mayo de 2013.

SÉPTIMO: Que el demandante también rindió la prueba testimonial, deponiendo por su parte los testigos que se indican, legalmente juramentados y examinados.

1.- Doña Claudia Navidad Huerta Vial, quien manifiesta que efectivamente existe un contrato de compraventa de un “campo” ubicado en la localidad de Linares celebrado entre las partes en el año 2013, y que consistía en que don Hernán Ponce le vendía a Juan Carlos Ponce dicho campo por el monto de \$37.000.000, que se iba a pagar con dos cheques, uno que fue pagado y el segundo protestado por orden de no pago. Ello lo sabe y le consta porque don Hernán Ponce se lo contó, y lo conoce desde hace unos 15 años por ser vecinos.

Agrega que efectivamente el demandado se encuentra en mora, ya que el segundo cheque, el cual vio, salió protestado por orden de no pago, y hasta hoy ha respondido por el valor de ese cheque. Ello lo sabe y le consta por lo relatado anteriormente.

En cuanto a los daños, indica que efectivamente el demandante los sufrió, pues en la parte económica don Hernán con ese dinero iba a realizar un negocio. Él es veterinario e iba a comprar unos ecógrafos que son equipos relacionados a su profesión, y de esa manera generar recursos. Eso significaría crear una clínica propia, y es más, el señor Ponce realizó unos cursos en el manejo de imágenes que entregan esas máquinas. Además, pensaba pagar la Universidad de su hijo que actualmente esta en deuda no pudiendo recibir su título, no obstante haber rendido todos sus ramos.

En lo moral, le consta que estuvo depresivo recibiendo tratamiento por un siquiatra, tomando pastillas por más de dos años, ya que no conciliaba el sueño y tenía estados de pérdida de memoria, lo que sabe y le consta por lo señalado anteriormente.

Señala que los daños, tanto económicos como morales son producto del incumplimiento en el pago acordado entre las partes, y que efectivamente don Hernán cumplió con su parte del contrato, encontrándose siempre dispuesto a conversar con el demandado a fin de solucionar el problema.

Repreguntada para que diga en qué consistió el cumplimiento del contrato por parte de don Hernán Ponce, responde que efectivamente le paso el 99% del campo que era el acuerdo que tenían.



Foja: 1

OCTAVO: Que la existencia del contrato invocado se encuentra acreditado con el documento acompañado y singularizado como “escritura pública de modificación social de fecha 11 de marzo de 2013”, que modifica la escritura de constitución de la “Sociedad Agropecuaria Silvícola Agroanial Limitada” de fecha 03 de agosto de 2007.

En efecto, dicho instrumento en su cláusula segunda, da cuenta que el demandante don Hernán Ponce Prieto, vendió, cedió y transfirió al demandado don Juan Carlos Ponce Prieto, quien compra para sí, el 98% de la totalidad de los derechos que al primero le correspondían en la sociedad, dejándose constancia además que el cedente era dueño y propietario del 99% de los derechos sociales.

El precio pactado ascendió a \$34.650.000, de los cuales se pagaron \$20.000.000 en el mismo acto al contado y en dinero efectivo, y se pactó el pago de los restantes \$14.650.000 para el día 30 de abril de 2013.

Asimismo, consta en la cláusula cuarta del instrumento, que se hizo la tradición de los derechos vendidos en el mismo acto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1901 del Código Civil.

NOVENO: Que queda además acreditado con la documental allegada, que la escritura de constitución de la sociedad de inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 35328, número 25256 del año 2007; y que la escritura de modificación social se inscribió en el mismo registro a fojas 29709, número 19785 del año 2013.

DÉCIMO: Que con lo anterior, ha quedado acreditado el contrato de compraventa de derechos sociales, y la existencia y contenido de la obligación que sirve de fundamento a la acción de autos, esto es, aquella por la cual el comprador don Juan Carlos Ponce Prieto debía pagar al vendedor don Hernán Ponce Prieto, el saldo del precio convenido, ascendente a \$14.650.000, el día 30 de abril de 2013.

Luego, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1537 inciso 3ero y artículo 1698, ambos del Código Civil, correspondía al demandado comprador probar que extinguió su obligación dentro del plazo convenido, ya sea por medio del pago, o por haber operado algún otro modo de extinguir las obligaciones, de manera que al no haberse aportado prueba alguna en dicho sentido, atendida su rebeldía, procede presumir el incumplimiento culpable de su obligación, y entender que se ha constituido en mora de cumplir de conformidad al artículo 1551 n°1 del Código Civil.

Refuerza la conclusión anterior, el documento aportado por el actor, consistente en un cheque girado por el demandado con fecha 30 de abril de 2013, por la suma de \$15.000.000, a nombre del demandante, con acta de protesto por falta de fondos con fecha 24 de mayo de 2013, y que daría cuenta de no haberse solucionado la obligación pactada.

UNDÉCIMO: Que por otra parte, con la misma escritura de fecha 11 de marzo de 2013, queda establecido que la parte vendedora cumplió su obligación de entrega. En efecto, según se anotó en la cláusula cuarta de dicho instrumento, se dispuso que en ese mismo acto la vendedora hacía la tradición a la compradora de los derechos vendidos de conformidad al artículo 1901 del Código Civil. Luego, consta también que dicho instrumento se inscribió en el respectivo registro y que se anotó al margen de la inscripción de la escritura mediante la cual se constituyó la sociedad cuyos estatutos modificó.

DUODÉCIMO: Que tratándose la obligación incumplida en la de pagar el precio pactado, la cual reviste de conformidad al artículo 1444 del Código Civil el carácter de esencial para el contrato de compraventa; y siendo el saldo adeudado el ascendente a \$14.650.000 de un total de \$34.650.000, esto es cerca del 50% del precio, se colige que el incumplimiento de dicha obligación reviste una gravedad tal para la parte cumplidora, que ha de considerarse un incumplimiento resolutorio para efectos de justificar la procedencia de la resolución del contrato como remedio contractual ejercido.



Foja: 1

DÉCIMO TERCERO: Que Atendido lo razonado en los considerandos precedentes, y concurriendo los requisitos para la procedencia de la acción incoada, se acogerá la demanda declarando resuelto el contrato de compraventa de derechos sociales contenido en la escritura pública de modificación social de fecha 11 de marzo de 2013, celebrado entre don Hernán Ponce Prieto y don Juan Carlos Ponce Prieto.

Se deja constancia además, que lo anterior es sin perjuicio del contrato de compraventa celebrado entre el demandante y don Pablo Ignacio Ponce Vera que consta en el mismo instrumento, quedando por lo tanto este, inalterado.

DÉCIMO CUARTO: Que procediéndose con la resolución del contrato, la jurisprudencia y la doctrina, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1487 y 1875 del Código Civil, señalan respecto a los efectos de su declaración, que “el vendedor tiene derecho: 1º a que se le restituya la cosa vendida y sus accesorios; 2º a que se le restituyan los frutos que éste hubiere producido; 3º a que se le indemnicen los deterioros que el comprador hubiere causado en la cosa; 4º para retener las arras o exigir las dobladas, y 5º para exigir perjuicios por la inexecución del contrato, según lo dispone el artículo 1489.- A su vez, el comprador tiene derecho: 1º a que se le restituya la parte del precio que hubiere pagado, y 2º a que se le abonen las mejoras hechas en la cosa” (Alessandri R. Arturo, “De la Compraventa y de la Promesa de Venta, Tomo II, Volumen 2, Editorial Jurídica de Chile, año 2011, pág. 559).

Ante ello, se deberá proceder a las restituciones mutuas entre las partes a fin de quedar estas en el mismo estado en el que se encontraban antes de la celebración del contrato, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1875 inciso segundo del Código Civil se ordenará al actor a restituir a su contraria la parte del precio efectivamente pagado, que asciende de acuerdo a lo señalado en el mismo contrato, a la suma de \$20.000.000; y por su parte, se ordenará a la demandada restituir al actor los derechos sociales que adquirió en virtud del contrato resuelto.

DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto a la restitución de frutos e indemnización de perjuicios solicitadas por el actor, y la opción que ejerció en virtud del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dejar para la etapa de ejecución del fallo la discusión de su especie y monto, conviene tener presente lo señalado por nuestra Excm. Corte Suprema en una sentencia reciente respecto de las condiciones para su aplicabilidad, así, dicha magistratura señala: “Que, para resolver el problema jurídico planteado, se debe tener presente que el daño o perjuicio es uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual invocada -supuesto necesario y esencial de la misma- el que debe ser acreditado o al menos se debe entregar la determinación de las bases que permitan su liquidación. Sin su concurrencia no puede surgir la obligación de indemnizar.- Así, el derecho de reserva que contempla la citada disposición legal dice relación con la posibilidad de dejar para instancias posteriores -ejecución o juicio ulterior- la determinación de la especie y monto a que deberá ascender la indemnización de los perjuicios a ser pagados por una de las partes, instituto que opera sobre la premisa o presupuesto esencial de que se acredite la existencia del daño, tanto más si es éste el que genera la responsabilidad invocada, pues el ejercicio de la reserva no exime a la parte del ineludible deber de demostrar el daño cuya reparación reclama.- Al respecto esta Corte ha señalado que “La reserva contemplada en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil alcanza sólo a la especie y monto de los frutos y perjuicios, de forma tal que aun en ese evento, la actora está obligada a demostrar, durante la substanciación del juicio, la existencia o efectividad de unos y otros” (C Suprema, 24 de octubre 2002. R, T 99, sec. 1ª, p. 263).- En este sentido el profesor R.A.M., expresa: “De acuerdo al art. 173 del C.P.C. la especie y monto de los perjuicio pueden ser fijados en el mismo juicio en que se establezca la obligación de indemnizarlos, pero puede también reservarse su discusión para la ejecución del fallo o en juicio diverso, siempre que a lo menos estén acreditadas las bases que deben servir para su liquidación” (“Las Obligaciones”. L.. Sexta Edición. Año 2014. P. 1021)” (El destacado es nuestro) (Sentencia del 12 de octubre de 2017, Rol 18163-2017, considerando séptimo).

DÉCIMO SEXTO: Que establecido lo anterior, y en virtud de la regla general en materia de carga probatoria contenida en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde al demandante, una



Foja: 1

vez ejercida la opción del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, probar a lo menos en estos autos, la existencia de los perjuicios y de los frutos solicitados, de manera que establecidos estos, la discusión sobre su entidad y monto se lleve a efecto en un juicio diverso o en la etapa de cumplimiento del fallo.

En dicho sentido, el actor solo rindió la prueba testimonial para acreditar los frutos y perjuicios alegados, así, la única testigo compareciente depuso en cuanto a los daños económicos, que el actor iba a utilizar el dinero para iniciar un negocio consistente en generar su propia clínica veterinaria, para lo cual habría concurrido a cursos e iba adquirir ecógrafos, todo lo que no habría podido realizarse según se desprende de su declaración. Luego, respecto a los daños morales, señaló que el demandante entró a un estado depresivo, recibió tratamiento siquiátrico, y que tuvo que tomar pastillas por más de dos años para conciliar el sueño, además de tener estados de pérdida de memoria. Todo ello dice constarle por habérselo contado el mismo actor, quien conoce hace 15 años.

Ante lo anterior, y de conformidad a los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, no puede tenerse por acreditada la existencia de los daños, ya sean patrimoniales o los morales, así como tampoco la existencia de frutos que proceda devolverse en virtud de la resolución del contrato.

En efecto, la vaguedad de la declaración de la testigo y la falta de otros antecedentes probatorios, no permiten ni aún mediante presunción judicial, tener por acreditada dicha circunstancia, de manera que se procederá a rechazar la demanda en este apartado como se dirá en lo resolutivo del fallo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que en cuanto a lo señalado por el demandante en su libelo respecto a la indemnización de perjuicios fundada en el artículo 1559 del Código Civil, cabe colegir su improcedencia en la forma solicitada, pues la indemnización de los perjuicios moratorios procede en el caso de haberse solicitado el cumplimiento forzado de una obligación dineraria, esto es, en haber solicitado el actor el pago del saldo adeudado, en cuyo caso habría de pagarse la suma con los intereses indicados en la norma, y que constituyen el perjuicio generado por el retraso en el cumplimiento de la obligación, ello porque su determinación busca satisfacer el llamado interés positivo del acreedor, es decir, el dejarlo en la posición que hubiera tomado en caso de cumplirse con el contrato, sin embargo, con la declaración de la resolución, el interés buscado por el acreedor es el negativo, esto es aquel que busca dejarlo en la misma posición en la que se encontraba antes de celebrar el contrato, de manera que el pago de intereses por la mora en el pago del precio es incompatible con la declaración de la resolución del contrato demandada.

Lo anterior, es sin perjuicio de las nuevas obligaciones que nacen con la declaración de la resolución, esto es la de restituir a las partes lo que se habían dado con motivo del contrato resuelto, y de los perjuicios que puedan generarse con la mora en el cumplimiento de cada una de ellas.

DÉCIMO OCTAVO: Que examinada la demás prueba rendida, en nada alteran o modifican lo ya concluido, por lo que se omitirá su análisis particular.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1444, 1487, 1489, 1547, 1551, 1552, 1556, 1557, 1559, 1698, 1871, 1872, 1873, 1875 del Código Civil; y artículos 144, 254, y siguientes, 342, 346, 383, 384, 426 del Código de Procedimiento Civil; se declara:

I.- ☐ Que **se acoge** la demanda en contra de don Juan Ponce Prieto, y se declara la resolución del contrato de compraventa de derechos sociales contenido en la escritura pública de modificación social de fecha 11 de marzo de 2013, celebrado entre las partes, y en consecuencia, deberá el actor restituir a la demandada la suma de \$20.000.000, y esta última restituir a la demandante los derechos sociales vendidos, dentro de décimo día desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

II.- ☐ Que **se rechaza** la acción de indemnización de perjuicios y restitución de frutos.



C-13652-2017??

?

Foja: 1

III.- ☐ Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol 13.652-2017

DICTADA POR DOÑA SONNIA NAVARRO MORALES, JUEZ SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **San Miguel, once de Septiembre de dos mil veinte**

